

RESUMEN DE PRENSA

LA INFORMACION ECONOMICA EN LA PRENSA INTERNACIONAL

INDICE

	Pág.
A varias velocidades	139
La CE después del veto	140
Los daneses dicen no	142
¿Por qué los daneses dijeron no?	144
Los próximos pasos de la UEM	145
Sobre cómo superar el obstáculo danés	147
Dudas sobre Delors	149
Los alemanes ante la UEM	151
El Banco de Inglaterra ante la UEM	153
Las difíciles preguntas del Banco Internacional de Pagos	155
Un refuerzo contra Maastricht	156
Las relaciones Norte-Sur después de Río y en vísperas de la cumbre de los 7G	159
Señor, líbranos de los déficit	161
Suiza abandona su posición tradicional	163
Las previsiones económicas pueden perjudicar su salud	164

A varias velocidades.

Con este título publica "Le Monde" de 4 de Junio el siguiente editorial.

La democracia no depende de la magnitud de las mayorías. Unas pocas decenas de miles de daneses han bastado para que vencieran en Dinamarca los opositores a la ratificación del tratado de Maastricht, después de lo cual es todo el edificio comunitario el que debe ser revisado.

Cualquiera que sea la solución jurídica que se encuentre para que el proceso de integración europea -económica, monetaria y política- no resulte bloqueado, el voto de los daneses es una advertencia que no dejará de tener consecuencias en la actitud de los otros países comunitarios. Los adversarios de Maastricht van a encontrar en ello estímulos y argumentos para la defensa de sus tesis, y esto en una fase en que las opiniones públicas tendían ya a atribuir a una Europa más rigurosa de lo previsto la responsabilidad de un descontento que la mayor parte de las veces no le corresponde.

La actitud de los daneses es paradójica en un momento en que hay una cola de candidatos a las puertas de la Comunidad. La solidaridad nórdica, a la que los daneses habían rendido tributo con ocasión de la campaña sobre el Acta Unica, queda en una posición delicada toda vez que suecos y finlandeses -y sin duda, en Octubre, los noruegos- manifiestan su intención de entrar en la CE.

"Una Dinamarca perdida, diez encontradas", parece que había dicho Mitterand en la reciente cumbre franco-alemana, señalando que, reducía provisionalmente a once miembros, la Comunidad aumentaría rápidamente a doce, y después a trece, a catorce y a quince". Así es, en efecto, pero también es verdad que el rechazo por parte de los daneses del acuerdo de Maastricht no deja de exigir el replanteamiento de la ampliación de la Comunidad, toda vez que los riesgos de que un país rechace este o aquel punto de la integración serán más grandes cuanto mayor sea el número de los países miembros. Lo que era posible llevar a cabo entre seis, o nueve, o diez, puede no serlo ya entre doce, y lo será menos aún cuando la Comunidad cuente un día con más de veinte participantes.

Por otra parte, les es difícil a los miembros fundadores negarse a admitir en el seno de la CE a países que reúnan las condiciones políticas y económicas necesarias y que se obliguen a respetar las reglas del juego. La única solución es la Europa de varias velocidades, cualquiera que sea el nombre con que se la designe: "Europa de geometría variable", o "Europa de los centros concéntricos", o incluso "Europa a la carta".

Los países con unos vínculos integradores menos firmes deberían gravitar alrededor de un núcleo central de Estados con unos lazos más estrechos que afectaran a más materias. Tal núcleo central lo formarían, lógicamente, Francia y Alemania -los dos países que más adelante han llevado la integración con la condición, esto sí, de que tal entente no fuera exclusiva.

Si contribuye a concienciar a la gente de que la profundización y la ampliación de la Comunidad no son contradictorias, y si, lejos de incitar a una desaceleración del proceso, empuja a los más decididos a proseguir el avance (al tiempo que estos mejoran sus relaciones con los más retrasados), la derrota de los "europeos" en Dinamarca podría resultar positiva.

La CE después del veto.

Este título del editorial de "Financial Times" del día 4, que se transcribe a continuación.

El rechazo danés del tratado de Maastricht supone un contratiempo substancial para los políticos y funcionarios de Bruselas y de Copenhague, todos los cuales presionaron a favor del "sí" de un electorado reducido y escéptico. Pero no todo se ha perdido para la Comunidad Europea, y ni siquiera para la unión económica y monetaria. Incluso podría haberse ganado algo.

Lo que ahora cabría concebir -aunque sólo después de una reflexión detenida y fría- es una CE con una diversidad todavía mayor -en cuanto a los compromisos- de lo establecido en Maastricht. Tal Comunidad, en cualquier caso, podría hacer frente en mejores condiciones a la doble tarea de ampliación y de profundización que la CE tiene ante sí.

La nube que descendió sobre Bruselas contiene, en efecto, aspectos positivos. Desde el momento en que terminó la negociación del tratado se hizo evidente que este incorporaba grandes contradicciones. Al agudizar la atención de gobiernos y electorados sobre el contenido de aquel, algunas de dichas contradicciones podrían ser superadas.

Si el resultado final va a ser o no más favorable dependerá de cómo reaccione el resto de la CE ante lo sucedido en Dinamarca. Aunque les pueda resultar difícil, Delors, Kohl y Mitterrand deberían evitar caer en una depresión.

El problema inmediato tiene solución. Debería por ejemplo ser posible que los otros 11 países cumplieran partes importantes del tratado de Maastricht -v.g., sobre la unión económica y monetaria, o sobre cooperación en política exterior pasando rápidamente a una nueva base legislativa, independiente de la convenida el año pasado.

Los 11 podrían incluso llevar a cabo el proceso de ratificación en curso, esperando que los daneses volvieran al redil, tal vez mediante un nuevo referéndum. De todos modos, la actitud de "aquí no ha pasado nada" adoptada ayer en Bonn y en París no es del todo convincente. Lo malo de la situación presente es que las dudas de los daneses pueden ser ampliamente compartidas en otras partes. Si los líderes de Europa, de hecho, se han adelantado mucho a sus pueblos, se hacen vulnerables a contraataques populistas e incluso xenófobos, de lo que puede resentirse la misma CE.

Más que continuar operando como si nada hubiera ocurrido, lo que se debería hacer es analizar los hechos atentamente y ver cómo se puede hacer frente a la nueva situación.

En primer lugar, sería del todo irresponsable sugerir que la no ratificación de este tratado -si ello llegara a ocurrir amenazaría la obra comunitaria. La CE, como tal, es la base de la prosperidad y de la estabilidad del occidente de Europa. La interrupción del proceso no haría en absoluto necesario, ni siquiera recomendable, que debiera darse marcha atrás.

En segundo lugar, puede resultar oportuno considerar la manera cómo los Estados miembros podrían proseguir el camino a diferentes velocidades, e incluso de maneras diferentes. Un ejemplo lo constituyen los

países del grupo de Schengen que se comprometieron a la supresión de los controles en frontera. Otro ejemplo anterior lo habían representado los países del Benelux.

No sería imposible, por ejemplo, que un tratado sobre la unión económica y monetaria fuera acordado por un determinado número de países miembros, incluso en las líneas convenidas en Maastricht. Cualquier banco central así establecido substituiría al final del proceso al Bundesbank dentro del Sistema Monetario Europeo, dejando que el resto de los países miembros mantuviera con aquellos el mismo tipo de relaciones que existen en la actualidad.

En tercer lugar, una estructura más fluida tendría la ventaja de facilitar la ampliación de la CE. El progreso hacia una Europa más unificada, pero con unas estructuras más flexibles, se produciría de una forma menos uniforme, y los diferentes países conservarían la libertad de decidir a cuales de los diferentes círculos concéntricos deseaban adherirse.

"Last but not least", la convergencia en materia de inflación y en la estabilidad del tipo de cambio dentro de la CE (en realidad, dentro del occidente europeo en su conjunto) precede al debate sobre la UEM, y no digamos al resultado de la conferencia intergubernamental. No hay razón para que esta no continúe, incluso si la perspectiva de la UEM fuera a ser menos inmediata.

La razón de la convergencia fue la voluntad de los Estados miembros de la CE de seguir las políticas más convenientes, e incluso necesarias. La doctrina ortodoxa se propagó a lo largo de los años 80 desde Alemania hasta lugares tan alejados como Dublín, Londres, Madrid y Lisboa. Se trata de una doctrina económica, no política. Los gobiernos deben ratificar ahora su compromiso, contraído en Maastricht, y esto tanto por lo que se refiere a la estabilidad de los tipos de cambio como a la política fiscal. Deben hacerlo por la poderosa razón de que les conviene individualmente.

Si se llega al convencimiento de que tal compromiso es auténtico y firme, no tiene por qué producirse la disrupción de los mercados de bonos y de cambios que algunos temen. De hecho, los tipos de interés a largo plazo -la mejor medida individual de las expectativas de los mercados por lo que a la inflación a largo plazo y a los tipos de cambio se refiere- no están más próximos que las actuales tasas de inflación. Por consiguiente, los mercados no parecen estar persuadidos de que la UEM es inevitable. Si los gobiernos actúan adecuadamente, los mercados no deben llegar a la conclusión de que la convergencia continuada es imposible. A algunos países esto les supone un reto importante, sobre todo a Italia. Pero es un reto al cual Italia, necesariamente, hubiera tenido que hacer frente más pronto o más tarde.

Las exigencias esenciales ahora son no alarmarse y, a la vez, no olvidar lo que ha sucedido. Sería un error permitir que cundiera el pánico, entre otras razones por lo mucho que se ha conseguido en el seno de la CE, pero también, y porque la Comunidad dispone de otros medios para integración de Europa en su totalidad.

También sería una locura ignorar lo que ha sucedido. La CE es una asociación de Estados democráticos, por lo que sólo sobrevivirá con el consentimiento de sus gentes. Un fracaso en lograr el consentimiento de éstas debe llevar al análisis de lo que ha sucedido. Si los líderes deben reconsiderar por lo menos una parte de que habían convenido, que lo hagan. A largo plazo, sólo así podrán conseguir una Comunidad duradera y verdaderamente integrada.

Los daneses dicen no.

"The Economist" del día 6 de Junio publicaba el siguiente editorial.

Se ha perdido la apuesta a favor del tratado sobre la Unión Europea y con ello se ha puesto bruscamente fin a tres años febriles. El fallo se ha producido como resultado de un referéndum celebrado en Dinamarca, uno de los tres países más pequeños de la Comunidad y, al igual que Gran Bretaña, un euroescéptico empedernido. Pero no importa, puesto que la regla fue siempre clara: las enmiendas al Tratado de Roma deben ser ratificadas por la totalidad de los miembros comunitarios. Los otros 11 países le darán ahora vueltas y más vueltas a esa regla en un intento de mantener el tratado a flote. El esfuerzo será agotador y corren el riesgo de repetir el error que les ha llevado a donde se encuentran en la actualidad.

El tratado de Maastricht es, o era, mucho más que una enmienda constitucional: era un nuevo diseño. No contento con darle a la Comunidad una moneda única, un banco central y una gran autoridad en cuestiones de macroeconomía, Maastricht le habría dado una ciudadanía, cierta autoridad en materia de política exterior y un embrión de política de defensa. Habría extendido el ámbito de la legislación comunitaria a casi todas las áreas de posible competencia de un Estado-nación. Todo esto, y más aún, fue considerado por los daneses, puesto que su gobierno, actuando con una gran honradez, les había inundado con miles de impresos con el texto del tratado.

El hecho de que una población excepcionalmente informada rectifique airadamente a su propio Parlamento subraya el error de Maastricht y muestra cómo una votación perdida en un pequeño país puede aún acabar con algo que, con el soporte de sólo 24.000 daneses más, hubiera podido seguir un curso imperturbable. Maastricht fue algo precipitado, sometido a la aceptación de la Comunidad por los gobiernos de Francia y Alemania con carácter urgente para satisfacer su sueño de unión europea antes de que desapareciera del todo el recuerdo de la situación de Europa en la etapa de la guerra fría.

Una conferencia de países puso entonces en movimiento el mecanismo negociador que había de conducir a grandes cambios, pero sin contar con los electores. Incluso en Francia y en Alemania quedó pronto claro que las autoridades habían ido más deprisa que muchos de los gobernados. Por consiguiente, la resistencia de los daneses a no ser tenidos en cuenta no es algo irritante que los otros 11 confiados países deban descartar para ellos mismos. Por el contrario, se trata de una circunstancia que presionará sobre los gobiernos y sobre la gente que tenga las ideas claras y provocará de cara al futuro una evolución de los asuntos europeos más gradual y, desde luego, distinta. El gobierno francés ha decidido ya la celebración de un referéndum sobre Maastricht. El británico se verá sometido a presiones del todo justificadas para hacer lo mismo. Aunque Maastricht fue objeto de amplios debates en Westminster, los británicos tienen sólo una idea muy vaga de lo que el tratado puede representar para su sistema político.

El veto danés alterará y retrasará también otro cambio importante de la CE: su ampliación. Los países nórdicos han estado decantándose del lado de la Comunidad como fichas de dominó. Primero fue Suecia, de la mano del convencido eurófilo primer ministro, Carl Bildt. Y después fue Finlandia la que manifestó sus deseos de no quedar fuera, dejando al margen sólo a Noruega, que sigue meditando su decisión. Ahora que los daneses han dicho no, imagínese el impacto. Por otra parte, también austriacos y suizos -dos pueblos cuyos gobernantes, con su euroentusiasmo, pueden haberse asimismo adelantado a los deseos de la población- tomarán buena nota de lo sucedido. Los que no lo harán serán los otros candidatos de centro Europa, para los cuales la CE sigue siendo como una especie de El Dorado.

Se hace difícil adivinar qué es lo que los daneses vieron de inaceptable en el tratado de Maastricht. Probablemente fue una combinación del tratado mismo y de todo lo que se viene hablando sobre la ampliación de la Comunidad. La Comisión Europea, curiosamente defraudada por Maastricht, temió que la avalancha de nuevos miembros diluyera todavía más su visión de la unión. Fue por esto por lo que su presidente, Jacques Delors, contraatacó insinuando que la Comisión debía ser reforzada, que había de reducirse el poder relativo de los países más pequeños y que convenía celebrar otra conferencia para decidir tal tipo de cuestiones. ¿Otro Maastricht?. ¿Ya?. Así no puede sorprender que muchos daneses creyeran que iban a caer en un pozo sin fondo.

Algunos, los que aborrecen la idea de una confederación de Estados con cierto grado de autoridad supranacional, se regocijarán del conflicto que se ha originado. Para *The Economist*, el error no fue nunca el objetivo que se perseguía, sino la forma inmoderada con que se iba tras él. El mercado único europeo ni siquiera funciona aún. El plan detallado de una unión monetaria resultaba excesivo para lo que razonablemente podría realizarse. La Comunidad se introducía en áreas de legislación centralizada -particularmente en materia de política social- que contradecían su propio principio de "subsidiaridad". Pero sobre todo había en el aire como un halo de coacción, de gobiernos que olvidaban a la opinión pública, de "salvemos a los alemanes de ellos mismos". La coacción fue el ingrediente más devastador del Comecon.

Los gobiernos europeos se enfrentan ahora con un conflicto constitucional. Maastricht no es un tratado separado del que los 11 pueden simplemente excluir a Dinamarca. Maastricht supone cambios profundos de las reglas de un club del cual Dinamarca es miembro. La CE sigue existiendo sin tales cambios. Tampoco cabe pensar, en principio, en abstraer determinadas partes de Maastricht. Tal tipo de tratados son siempre obras que contienen algo para todos, por lo que resultan muy difíciles de seccionar.

La Comisión y otros países miembros están barajando dos soluciones susceptibles de ser examinadas después de que los otros 11 hayan ratificado el tratado. Una de ellas consistiría en invitar a Dinamarca a renunciar a su participación en la política comunitaria sobre materias de relaciones exteriores, inmigración y defensa, y proceder seguidamente a un nuevo referéndum sobre el resto de las cuestiones. La otra supondría abolir el Tratado de Roma, incorporar Maastricht a un tratado completamente nuevo suscrito por 11 miembros y relegar Dinamarca a la condición de miembro de la Área Económica Europea, en la cual se hallan ahora los otros países nórdicos. Es la primera solución la que representa el camino flexible que ha de ser el de la CE del futuro.

Se presumía que el resto de la década iba a resultar agitado en la Europa comunitaria. Se habían formulado demasiadas promesas que podían resultar de difícil cumplimentación. El referéndum danés ha precipitado los acontecimientos. La tormenta ha estallado antes de lo previsto. Cualesquiera que sean las consecuencias de todo ello, lo sucedido confirmará dos verdades. La primera es que la fuerza impulsora de la unión europea sigue siendo el hecho de que los modernos Estados europeos no pueden conseguir buenos resultados económicos actuando independientemente los unos de los otros. El mercado único seguirá adelante, incorporando todavía más áreas europeas. La segunda es que la Comunidad deberá ser más flexible en adelante, concediendo un mayor margen de elección a los países para que acepten o rechacen este o aquel aspecto de la unión. Incluso se puede pensar que los seis países originarios saldrán de esta crisis formando un nuevo núcleo dentro de la creciente diversidad comunitaria y a salvo de todo vikingo disgregador

¿Por qué los daneses dijeron no?.

("The Economist")

Las bibliotecas y las oficinas de correos de Dinamarca habían estado repartiendo 500.000 copias del texto entero del tratado de Maastricht, es decir, una por cada diez ciudadanos daneses. Puede que esto fuera un error. Muchos de esos ciudadanos echaron un vistazo al difícilmente comprensible y farragoso texto y dijeron algo así: "si creen que voy a votar a favor de todo esto se van a llevar una sorpresa". Y sorpresa hubo -por lo menos para la clase política, para el mundo de los negocios y para casi toda la prensa- cuando, el 2 de Junio, los electores de Dinamarca, en un referéndum que el Parlamento ha de respetar, decidieron, por una estrecha mayoría, pero causando un gran estruendo, rechazar el tratado 50'7% en contra y 49'3% a favor.

Los que votaron en contra posiblemente no emplearon mucho tiempo en el análisis de los detalles del tratado ni de las razones más o menos personales que les llevaron a votar no, pero sabían lo que no les gustaba de todo ello. A su juicio, este tratado, aunque no fuera exactamente así, apuntaba hacia una Supereuropa, hacia un ejército europeo y hacia un nuevo incremento de los poderes de Bruselas. Encuestas de opinión y entrevistas en la calle sugieren que, para muchos daneses, tal Europa destruir a la independencia nacional, e incluso, tal vez, el mismo carácter del país, Había llegado el momento de evitarlo.

Tales temores existían ya, aunque más matizados, cuando los daneses votaron mayoritariamente a favor de la incorporación de su país a la Comunidad Europea, en 1972, y también cuando, en 1986, aprobaron el Acta Unica. Pero en tales ocasiones los políticos presentaron la cuestión como si afectara sólo a la economía. Sobre todo en 1972, se trataba de poder vender productos agrarios daneses (que ahora constituyen el 24% de las exportaciones totales del país) al resto del occidente europeo.

Incluso en 1986 poco fue lo que se dijo sobre la Europa política. Esta vez, en cambio, no hubo manera de que los partidos favorables a Maastricht -desde los conservadores y los liberales que forman la coalición gubernamental hasta los socialdemócratas de la oposición- pudieran negar que lo que estaba en juego era el futuro político de Europa. Las opiniones de la mayoría de los políticos sobre esta materia ha cambiado desde 1972, e incluso desde 1986, convenciéndose de que la reunificación alemana ha hecho todavía más deseable comprometer a Alemania en una Unión Europea. Pero su argumento se vendió mal. La instrumentalización de la unión alarmó a la gente.

Incluso personas tan amablemente persuasivas como Poul Schlüter, el primer ministro, y Uffe Ellemann-Jensen, el ministro de Asuntos Exteriores, fracasaron en su intento de convencer a la mayoría de que "Unión Europea" no era una frase que debiera asustar a nadie. Las fuerzas contrarias a Maastricht -una curiosa amalgama de entusiastas pacifistas y ecologistas, ex-marxistas del Partido Socialista y populistas del derechista Partido del Progreso- no pudieron reunir muchos recursos para su campaña, pero obtuvieron el resultado que apetecían.

La derrota es especialmente dolorosa para los líderes socialdemócratas, que constituyen con mucho el mayor partido de Dinamarca, el cual, en las elecciones de 1990, obtuvo el 37% de los votos. Sus seguidores parecen haber votado en contra del tratado en la proporción de dos a uno. Esto añade un elemento nuevo a la explicación de los resultados del día 2 de Junio.

Hace mucho tiempo que los socialdemócratas dejaron de ser el partido de los trabajadores industriales. En la actualidad el partido está principalmente integrado por viejos pensionistas y por la tercera parte de la

masa laboral que trabaja en los servicios públicos. Las mujeres danesas -el 57% de las cuales, según parece, votó en contra del tratado, con lo que decidieron la cuestión- están empleadas en su mayoría en las escuelas y en los servicios sanitarios y asistenciales. El gobierno danés quiere reducir los impuestos del país -en la actualidad los más elevados de la CE- y dejarlos a un nivel próximo a la media comunitaria, lo que obligaría a disminuir el gasto público destinado a los servicios citados. Dichas mujeres contemplan Europa como una amenaza económica, además de política.

Pero si Dinamarca deja la Comunidad como resultado del referéndum, o incluso si sus relaciones con la CE se reducen a lo que eran las de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, las consecuencias que se deriven de todo ello serán importantes, Dinamarca dispone ahora del PNB per cápita más elevado de la Comunidad. Si la inversión abandonara el país, y si los daneses dejaran de participar de la política agraria común, el daño podría ser muy serio. Y, como decía, furiosa, una mujer que había votado a favor de Maastricht, ¿por qué deberían los otros 11 países ser buenos con una Dinamarca que "sólo desea aprovecharse y no compartir las responsabilidades que se derivan de la creación de una Europa mayor?".

Los próximos pasos de la UEM.

("The Economist", edit.)

Mientras los gobiernos europeos van mostrando su contrariedad después de que Dinamarca les haya estropeado sus planes sobre la unión económica y monetaria, los electores de los mismos países manifiestan su nerviosismo por igual motivo. Aunque resultara inoportuno, lo sucedido en Dinamarca el 2 de Junio fue algo así como la democracia en acción. Después de haber escuchado cómo los principales partidos políticos les decían que la UEM y todos los ornamentos que los gobiernos europeos habían confeccionado a su alrededor eran buenos para ellos, unos electores bien informados dijeron "no estamos de acuerdo". Cualquiera que sea la opinión de uno sobre los pros y los contras de la unión económica, monetaria y política de la forma en que fue concebida en Maastricht, tal manifestación de la voluntad popular es algo que los demócratas han de celebrar. Y copiar.

Como era de esperar, la respuesta de los gobiernos europeos ha consistido en un intento de limitar los daños. En la medida de lo posible -parecen decir- se trata de seguir el proceso como si nada hubiera ocurrido. El gobierno portugués, que en la actualidad ocupa la rotatoria presidencia comunitaria, ha descartado una renegociación del tratado. Otros gobiernos parecen ser de la misma opinión y buscan una solución específica para el problema planteado por Dinamarca, el cual es contemplado más como un traspies técnico que como un tropiezo fundamental. Tal vez pueda permitírsele a Dinamarca quedar exenta de alguno de los compromisos de Maastricht. O quizás, en el peor de los casos, Dinamarca deba dejar la CE. Sobre todo que no cunda el pánico. alguna solución se encontrará.

Pero mejor sería que no fuera así. Lo que la UEM necesita ahora no es una reparación apresurada, sino una pausa para reflexionar. Desde el referéndum danés sólo Francia ha anunciado que también ella celebrará un referéndum (probablemente en Septiembre). Irlanda ya había anunciado que va tener uno el 18 de junio. Los gobiernos de estos dos países confían que el resultado será favorable a la UEM. Francia, después de todo, es el primer visionario de la Comunidad. Irlanda, al ser pobre, tiene todavía una razón mejor para estar a favor tras lo que la CE llama "cohesión", Irlanda espera recibir recursos seis veces mayores de los que manda a Bruselas, punto esencial que el gobierno ha subrayado insistentemente en su campaña a favor del "sí". Ahora bien, si las matemáticas no fallan, la "cohesión" puede no resultar tan atractiva para otros países comunitarios. Las gentes de estos también querrán tener el derecho a expresar su opinión.

No debería negárseles. En todos los países de la CE debería ahora celebrarse un referéndum sobre Maastricht. Si alguno de ellos vota no, como podría ocurrir, ¿seguirá estando "fuera de lugar" una nueva negociación del tratado?. Sería escandaloso que los gobiernos lo pensaran así, pero afortunadamente esto es impensable, No tendrían más remedio que empezar de nuevo, que es como debería ser.

Esta revista ha sostenido en todo momento que los electores tienen el derecho de votar directamente sobre la UEM. Obviamente, un referéndum aleja cualquier duda que pudiera existir sobre la legitimidad de tales cambios. Pero, como el resultado danés ha mostrado, tiene otra gran virtud obliga a los gobiernos a defender -y, por consiguiente a explicar- sus planes. Eso es lo que ocurrió en Dinamarca. Se difundieron cientos de miles de copias del tratado y hubo un vigoroso debate nacional. Los gobiernos de los otros países han estado imperdonablemente displicentes a la hora de justificar sus acciones.

Ahora deberán abrir el debate, y este será de verdad. Martin Feldstein, uno de los principales economistas norteamericanos, sostiene en un artículo publicado en estas mismas páginas que Europa debería abandonar la UEM. Feldstein dice que una moneda única sería económicamente perjudicial, y que las ventajas políticas de una unión más estrecha -si llegara a producirse- no compensarían el coste. Nuestro punto de vista es distinto. A nuestro juicio, el proceso hacia una unión política más estrecha debería esperar a que los pueblos de Europa la pidieran. Mientras tanto, mucho es lo que se puede obtener de la prosecución de un objetivo más modesto de lo que la Comunidad pueda ser un mercado único auténtico, similar al que tienen los Estados Unidos, éstos con una moneda única.

Feldstein no ve justificación económica alguna para tal moneda única. Algunos pasajes de su argumentación parecen sugerir que Norteamérica estaría mejor hoy si los estados hubieran conservado monedas separadas. Esto nos parece poco razonable, para decirlo con palabras suaves. Es verdad, sin embargo, que casi todos los defensores europeos de la unión monetaria desean la moneda única por razones que nos parecen poco persuasivas hacer posible una Europa federal, o acabar con el poder hoy hegemónico del DM. También es verdad que una moneda única europea conducirá a una desilusión si el banco central que se cree para administrarla no se halla bien protegido de toda ingerencia política. Otro punto éste, por cierto, respecto al cual el tratado de Maastricht más bien suscita preocupación.

Hay una cuestión en la cual estamos completamente de acuerdo con Martin Feldstein. Hace ya tiempo que se nos debe un debate sobre estas y otras cuestiones y en el que participe alguien más que los políticos, economistas y otros profesionales de turno. Y si este debate ha de tener algún sentido, los gobiernos deben abandonar la actitud que han adoptado en los últimos días, es decir, aquella según la cual todas las opciones están cerradas. Si se debiera hacer caso de los ministros, no tienen alternativas, a propósito de Europa, en ninguna fase. Durante demasiado tiempo tales ministros, y también muchos comentaristas, han estado utilizando palabras tales como "necesario", "inevitable" e "ineludible" sin limitación alguna y sin razones que lo justificaran. Los pueblos de Europa pueden elegir su futuro, pero antes se les debe pedir que piensen en ello.

Puestos a elegir, es probable que los electores se inclinaran por una Europa más compleja que la que los ministros construirían: una Europa mucho más flexible, con una mayor libertad para los países individuales de aceptar o de rechazar diferentes áreas de gobierno colectivo. Si esto es lo que la gente quiere, y si el marco diseñado en Maastricht es incapaz de proporcionárselo, es Maastricht, y no la voluntad de la gente, lo que debe olvidarse.

Sobre cómo superar el obstáculo danés.

("The Economist")

El rechazo por parte de Dinamarca del Tratado de Maastricht promete convertirse en el cuerno de la abundancia para los expertos jurídicos europeos. El 4 de Junio, en Oslo, los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios acordaron que no renegociarían el tratado y que proseguirían sus esfuerzos para que este quedara ratificado a finales de año. Los ministros esperan que los daneses cambiarán de opinión cuando vean que el resto de la CE sigue adelante.

Las complicaciones legales empezarán a últimos de año si (el *si* es importante) los referéndum en Francia y en Irlanda, así como las votaciones parlamentarias en los otros ocho países miembros, han decidido aprobar el tratado. Dado que este no puede entrar en vigor si no lo han ratificado todos los países, los daneses -entiende la mayoría de los gobiernos- deberán celebrar otro referéndum. ¿Pero qué es exactamente lo que votarían en este?.

La CE no podrá responder a esta cuestión si no consigue reconciliar dos principios que parecen contradictorios. Todo el mundo está de acuerdo en que un segundo referéndum sobre el mismo texto exacto tendría poco sentido. Sin embargo, todo el mundo cree asimismo que cualquier renegociación supondría abrir una caja de sorpresas. "Si los británicos quieren una nueva redacción sobre subsidiariedad (el principio según el cual las decisiones deben tomarse al menor nivel gubernamental competente posible) nosotros renovaremos nuestra petición de un mayor voto mayoritario en cuestiones de política exterior", ha dicho un diplomático belga. Alemania, por su parte, ha hecho saber claramente que cualquier revisión del tratado debe incluir más poderes para el Parlamento Europeo, mientras que Francia desearía una enmienda disponiendo que sólo los franceses podrían ser alcaldes en Francia.

La mayoría de los gobiernos admite que la mejor manera de reconciliar tales principios sería añadir "declaraciones" y "protocolos" al Tratado de Maastricht. Estos apéndices estarían destinados a disipar las preocupaciones de los daneses sin por ello alterar el cuerpo del tratado. El gobierno danés debería adelantarse ofreciendo sugerencias específicas. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Douglas Hurd, ha dado a conocer ya una idea: una declaración sobre cómo el principio de subsidiariedad funcionaría en la práctica. Por lo demás, Hurd espera que esto mitigaría los temores daneses de una superpoderosa burocracia comunitaria.

Los Landër alemanes son sensibles a la subsidiariedad, razón por la cual el gobierno alemán, comprensiblemente, ha recibido bien la idea de Hurd. Funcionarios alemanes incluso han sugerido que un grupo de trabajo podría encargarse del estudio de la cuestión y elaborar un informe susceptible de ser sometido a la cumbre que ha de tener lugar en Edimburgo en Diciembre. Con todo, la mayoría de los otros países concede poco valor a la propuesta británica y pone de relieve que la subsidiariedad no representó ningún papel en el referéndum de Dinamarca.

Representantes franceses advierten que tal principio no puede ser definido de forma que guste a todo el mundo. Por otra parte, señalan que sólo si los 11 se mantienen firmes en la posición de "o todo o nada" se darán cuenta los daneses de su locura. En estas circunstancias, piensan aquellos que no debe hablarse de concesiones o de cambios, convencidos como parecen estar de que el hacerlo puede socavar los esfuerzos dirigidos a ratificar el tratado actual.

Pero independientemente de consideraciones tácticas, Franca tiene razones de fondo para oponerse a posibles concesiones a los daneses. Temen, en efecto, que éstas podrían conducir a una "Europa à la carte". Si Dinamarca fuera a ratificar el tratado sin por ejemplo, sus provisiones sobre política exterior o política de seguridad, o sobre la unión económica y monetaria o la ciudadanía -como ha propuesto el Partido Socialista del Pueblo- el precedente podría dar lugar a que otros países pudieran aceptar sólo las partes de la CE que más les gustaran. Esto, a juicio de Francia, debilitaría la cohesión comunitaria.

El problema que plantea la firmeza que Francia propone es que podría disuadir a los daneses para la celebración de otro referéndum, o para que votaran "sí" en el caso de que lo llevaran a cabo. Alemania dice que apoya a Francia, pero en privado sus representantes sugieren que la CE puede tener necesidad de mostrarse flexible. A su juicio, si los daneses quisieran un protocolo que les permitiera quedar excluidos de las provisiones sobre política exterior y política de seguridad, podría merecer la pena pagar este precio si el resultado fuera su ratificación del tratado.

Los daneses votaron no por razones diversas, razón por la cual le será difícil a su gobierno presentar demandas concretas a sus consocios comunitarios con la esperanza de que las concesiones de éstos aseguren un voto favorable al tratado. Dicho gobierno ha pedido a la CE que no haga concesiones, en la creencia de que esto puede llevar a los daneses a cambiar de actitud. Por esto en Oslo el ministro de Asuntos Exteriores, Uffe Ellemann-Jensen, no se opuso a la propuesta franco-alemana de un comunicado que incluía una fuerte crítica contra Dinamarca. Sólo Douglas Hurd defendió -y consiguió- un texto más suave.

Si los daneses votaran "sí" en un segundo referéndum Maastricht quedaría asegurado (aunque cualquier protocolo nuevo -los cuales, al revés de las declaraciones, obligan legalmente debería ser ratificado por los otros 11), Un segundo "no" danés conduciría a un caos constitucional sin precedentes. Los 11 intentarían entonces adoptar Maastricht sin Dinamarca. ¿Pero cómo?

La opción más fácil supondría la cooperación danesa. Los 12 países miembros enmendarían el Tratado de Maastricht de forma que entrara en vigor en cuanto lo hubieran ratificado 11 miembros. Otra enmienda definiría la relación especial de Dinamarca con la CE de tal modo que este país disfrutara de las ventajas económicas del mercado único sin disponer de una silla en los órganos de decisión del mismo. En tal caso, Dinamarca tendría el derecho de unirse a los once en una fase posterior, tal vez cuando Suecia entrara en la CE.

¿Pero qué pasaría si Dinamarca rechazara este plan?. Según se dice en Bonn, París y Bruselas -aunque no en Londres- Dinamarca, en tal caso, se expondría a la expulsión. Los 11 renunciarían al Tratado de Roma y volverían a empezar con un nuevo tratado que excluyera a Dinamarca. Los servicios jurídicos del Consejo de Ministros sostienen que esto sería legal.

Pero ninguno de estos planes para salvar el tratado de Maastricht valdría nada si un segundo país siquiera a Dinamarca y se negara a ratificarlo. La gran preocupación de los gobiernos es Gran Bretaña, debido al temor de que la resurrección de los euroescépticos del Partido Conservador pudiera obligar a John Major, el primer ministro, a pedir una nueva negociación.

Esto no ocurriría si quien ha de decidirlo es el Foreign Office. El ministro Hurd, en efecto, piensa que el colapso de Maastricht crearía tal incertidumbre y mala voluntad que las negociaciones del GATT, el mercado único y la ampliación de la CE quedarían paralizados. Peor aún, Francia y Alemania podrían llegar a formar un grupo más pequeño de países con los que constituir la UEM y un ejército europeo, dejando a Gran Bretaña fuera de juego. Los interlocutores europeos de John Major quieren saber si este valora más la influencia de su país en Europa que el apaciguamiento de los eurófobos de su partido.

Dudas sobre Delors.

("Financial Times", edit.)

La semana transcurrida desde que se produjo el apretado rechazo del tratado de Maastricht por parte de los daneses ha generado mucho más calor que luz. Era inevitable. Pero alguna luz sí ha habido. Parece claro, primero, que la Comunidad Europea no puede avanzar sin ratificar algo no muy distinto de Maastricht. Segundo, que puede ser necesaria alguna modificación, o nueva interpretación, del tratado. Y tercero, que será difícil completar las imprescindibles ratificaciones.

En medio de una situación tan delicada muchos podrían desear la paralización de las actividades normales, en espera de que la CE supere la actual crisis. Pero la Comunidad no puede permitirse este lujo. Hay sobre todo dos temas tan relacionados con las esperanzas de ratificación que deben ser afrontados con la mayor valentía. Se trata de dos futuros. Por un lado, el del presupuesto de la CE. Del otro, el de Jacques Delors.

Delors ha sido el campeón de "más Europa" desde que fue designado en 1984. Visionario de amplios horizontes a la vez que práctico, nadie, amigo devoto o enemigo encarnizado, puede dejar de respetarle, y esto tanto por su claridad de juicio como por su valor. Pero se ha hecho enemigos, en parte por su celo por la causa, pero también debido a la forma cómo ha pretendido aleccionar a ministros y jefes de gobierno, tratándoles como si fueran niños.

Delors no ha perdido ni un ápice de su capacidad para hablar claro. Ayer, en su discurso ante el Parlamento Europeo, amonestó a los ministros de Hacienda de los países más ricos de la CE por no haber aceptado las implicaciones fiscales de los compromisos de Maastricht. "No puede haber unión política", dijo, "si no está fundamentada en un bloque económico y socialmente conjuntado y coherente".

Esta opinión es discutible desde el punto de vista de la economía. Una unión económica y monetaria puede ser compatible con una pronunciada diversidad de los niveles de vida siempre que las diferencias de productividad se reflejen en los salarios. Pero la política es algo distinto. Los países más pobres de la periferia de Europa insisten en que una unión política implica el compromiso de reducir las diferencias de renta. También insisten en que el coste de la convergencia en materia de inflación y de los menores déficit fiscales requiere ser aminorado si se quiere que sus todavía frágiles estructuras resistan las inevitables tensiones.

Probablemente tienen toda la razón del mundo. Ahora bien, resulta difícil aceptar el incremento presupuestario propuesto por Delors, el cual pasaría del 1'2 del PNB de la CE al 1'37 por ciento del mismo. Ahí puede haber un importante obstáculo. Después de haber aceptado nada menos que la unión económica y monetaria, los ministros de Hacienda se resisten a asumir las minucias que resultan de la misma.

Como tantas veces anteriores, Delors no hace apenas más que señalar las consecuencias lógicas de las decisiones de los mismos gobiernos. Lo mismo ocurre -como él mismo hizo observar con la avalancha de directivas, muchas de las cuales han sido necesarias en el contexto del programa de mercado único. Incluso cuando la CE ha irritado más a países miembros específicos -en materia de armonización fiscal, por ejemplo, o a propósito del estatuto social-, lo ha hecho sólo como portavoz de otros gobiernos. Pero incluso en el caso de que Delors se haya limitado a poner en práctica la idea de la unión europea, sobre la que se había alcanzado previamente un acuerdo, su reelección para otros dos años puede resultar inoportuna. El problema con que ahora se enfrenta la CE es cómo asegurar la ratificación de un texto que los daneses han rechazado ya. Un fracaso en la consecución de un tratado, el que sea, sería desastroso para la credibilidad de la Comunidad. Ahora bien, una revisión del tratado requeriría probablemente mucho tiempo y podría terminar de mala manera.

La estrategia más plausible para superar el conflicto actual es hacer más creíble la noción de "subsidiariedad". Los británicos no son los únicos que objetan la norma cómo la Comisión penetra en los recovecos de la vida de un país. Las autoridades alemanas dicen lo mismo, en parte para atraer nuevamente a los daneses.

Delors utiliza el mismo lenguaje. Le dijo al Parlamento que quiere hacer de la CE una entidad más abierta y fiable, asegurar el respeto de las peculiaridades nacionales y clarificar el debate sobre soberanía. Este es, por supuesto, el buen camino. El problema es si Delors, un hombre al que se ha identificado -con razón o sin ella- con la potenciación de Bruselas, puede convencer a los parlamentarios y a los pueblos de Europa de que esa es realmente su nueva actitud. Lo que dice Delors es, como siempre, digno de ser escuchado. Lo que deben preguntar los gobiernos es cuánto tiempo podrá seguir siendo la persona más adecuada para decirlo.

Los alemanes ante la UEM.

("The Economist")

Independientemente de lo ocurrido en Dinamarca, es a Alemania a la que observan con nerviosismo los partidarios de la unión económica y monetaria. El tratado de Maastricht dice que la tercera y última fase de la UEM, para la que se prevén unos tipos de cambio fijos y un banco central europeo, empezará en 1997 si en esa fecha hay una mayoría de países miembros que reúnen los requisitos exigidos, o en 1999, si no se alcanza tal mayoría, en cuyo caso la unión la integrarían aquellos que sí reunieran las condiciones requeridas. Ahora bien, si Alemania decidiera abandonar su compromiso con el tratado antes que al DM, la unión no se crearía, toda vez que carecería de sentido una unión monetaria que no contara con la moneda europea más fuerte. Tal posibilidad no puede descartarse, a la vista de cómo están ahora las cosas.

Según las encuestas de opinión, hay más alemanes contrarios a la UEM que partidarios de ella. La mayoría de los políticos alemanes continúa defendiendo la unión (Peter Gauweiler, el ministro del Medio Ambiente bávaro, que llamó al ecu "esperanto money", es una excepción). El Parlamento alemán ratificará el tratado de Maastricht a finales de año. De todos modos, los políticos no tendrán más remedio que contar con la opinión del público. Theo Waigel, el ministro de Hacienda, y Helmut Schlesinger, el presidente del Bundesbank, desean interpretar el tratado de tal forma que le permita al DM sobrevivir cuanto más tiempo mejor.

Los alemanes se sienten tan vinculados al DM como la mayoría de los británicos a su monarquía, orgullosos como están de su moneda como símbolo de su éxito de la posguerra. Periódicos y revistas importantes, desde el popular Bild al sesudo Spiegel, han sostenido que la UEM le costaría mucho a Alemania, y piensan que el ecu traería consigo una tasa de inflación que podría situarse hacia la mitad de la del dracma.

El enorme coste de la ayuda a la zona oriental del país ha suscitado muchas dudas sobre la UEM. Un déficit presupuestario del -según algunos cálculos- 5% del PIB, así como una tasa de inflación de casi el 5 por ciento, hacen que la gente se sienta insegura. Muchos alemanes, así, estiman que su país no puede soportar la carga adicional de la unión económica y monetaria, la cual, a su juicio, exigiría que Alemania transfiera recursos a los países miembros más pobres.

Los políticos continúan sosteniendo que una Europa federal sería algo bueno para Alemania, y que la UEM es un paso esencial hacia esa Europa federal. Y puesto que el previsto banco central europeo ha sido modelado siguiendo las líneas del Bundesbank -añaden aquellos-, debería constituir una defensa contra la inflación. Según los mismos políticos, los "exámenes" a que deberán someterse los países con tradición inflacionaria les mantendrán, eventualmente, fuera de la unión. Pero todos estos argumentos no consiguen convencer a la mayoría de los alemanes.

El gobierno, deseoso de apaciguarles, aceptará la petición de los socialdemócratas de la oposición de que el Bundestag celebre la votación sobre la UEM en 1996, antes de que se tome decisión alguna sobre si la unión debe empezar en 1997. Tal votación no sería legalmente vinculante, y el gobierno, simplemente, "la tomaría en consideración". Esto "no tiene nada que ver con la posibilidad de optar sobre la UEM que se ha reservado Gran Bretaña", ha dicho Heidi Wiecek-Zeul, el portavoz de los socialdemócratas para asuntos europeos. "Todos estamos a favor de la transferencia de soberanía. Lo único que queremos es que haya un debate democrático antes de que eso suceda". Con todo, parece claro que sólo el más valiente de los gobiernos dejaría de tener en cuenta un NO del Bundestag, si tal NO se produjera.

Los socialdemócratas entienden que las uniones monetaria y política deberían progresar juntas. En su opinión, el Bundestag votará más fácilmente a favor de la UEM en 1996 si en la conferencia que se ha de celebrar dicho año para revisar el tratado de la Comunidad el Parlamento Europeo obtiene más poderes.

El Bundesbank, por su parte, establece la misma relación entre unión política y unión monetaria, pero no porque tenga fe alguna en el federalismo europeo. En realidad, el Bundesbank teme que la UEM incorpore países del sur que, sin la posibilidad de devaluar, perderían competitividad y sufrirían crisis de las que sólo podrían salir con la ayuda de los países del norte. "Una unión monetaria sólo funcionará si sus miembros forman una "comunidad solidaria", lo que significa conformidad de la gente para la transferencia de recursos a los países más pobres", ha dicho un funcionario del Bundesbank. "La opinión pública alemana lo aceptaría para el Benelux y para Dinamarca, e incluso, tal vez, para Francia, pero no para Italia". A juicio del Bundesbank, una UEM que incluya a Italia no puede funcionar.

Waigel y Schlesinger hacen todo lo que pueden para tranquilizar a la gente diciéndole que el DM seguirá ahí durante mucho tiempo aún. La mayoría de las versiones del tratado de Maastricht llaman "ecu" a la propuesta moneda única. Waigel dice que eso significa European Currency Unit y que es un nombre provisional. La semana pasada, en Frankfurt, le dijo a la Asociación para la Unión Monetaria Europea que tal moneda debe recibir un nombre que resulte aceptable a los alemanes. Waigel sugirió "frank", que fue una antigua moneda alemana y que hoy es la moneda francesa.

Schlesinger, en la misma reunión, advirtió que el uso del ecu no debe ser alentado "artificialmente" durante la fase dos de la UEM (que debe empezar en Enero de 1994), con lo que quiso significar que el DM seguiría siendo la moneda dominante. Schlesinger desilusionó a los entusiastas de la UEM al inventar el concepto de una "fase 3a" que empezaría con la fijación de los tipos de cambio y durante la cual coexistirían las monedas nacionales y el ecu (sic). Según el mismo Schlesinger, dado que la nueva moneda "necesitaría mucho tiempo para ganarse la confianza de la gente", la fase 3a "debería proseguir durante un largo período de tiempo". Sólo más tarde, en la "fase 3b", desaparecerían las monedas nacionales.

El tratado de Maastricht no dice nada sobre fases 3a y 3b. Lo que dice es que al principio de la fase 3, cuando los ministros de Hacienda fijen los tipos de cambio, "tomarán las otras medidas necesarias para la rápida introducción del ecu (texto inglés) como moneda única".

La peregrina interpretación que el Bundesbank hace del tratado no significa que desee detener la UEM. Su objetivo -al igual que ocurre con su campaña para establecer en Frankfurt el futuro banco central europeo- es facilitar la aceptación de la idea de la unión por parte de la opinión pública alemana. El gobierno conseguiría mucho en este sentido si pudiera controlar su déficit presupuestario y mostrar que el coste de la unificación está siendo sometido a control. En tal caso los alemanes podrían sentirse menos temerosos de perder su DM. Con ello tal vez desaparecerían las amenazas que pesan sobre la UEM.

El Banco de Inglaterra ante la UEM.

(Peter Norman, en "Financial Times")

En el debate reciente de la Cámara de los Comunes sobre el tratado de Maastricht, Norman Lamont, ministro de Hacienda, subrayó con razón que el tema de la unión económica y monetaria había sido discutido en Gran Bretaña más que en ningún otro país comunitario.

El caso es, sin embargo, que las cuestiones relativas a la constitución y a las responsabilidades del Banco de Inglaterra en el contexto de la UEM no han recibido hasta ahora atención alguna.

Aparece ahí, pues, una laguna que se debe llenar cuanto antes. El asunto no es sólo complejo sino que existe un problema de calendario. Así, por ejemplo, ocurre que el actual gobernador, Robin Leigh-Pemberton, ha de dejar el cargo a finales de junio del próximo año. Quienquiera que le suceda, ocupará el puesto durante los cinco años de mayores cambios desde la nacionalización del banco, en los años 40.

El estatuto del banco debe ser discutido por dos razones. Una de ellas es la tendencia global a hacer del banco central el primer responsable en la lucha contra la inflación y a independizarlo del gobierno con el fin de conseguir una mayor estabilidad de los precios. Si el Banco de Inglaterra conserva el status presente, su situación será cada día más anómala en el contexto de los bancos centrales de los diferentes países.

La segunda razón por la que ha de revisarse la situación del banco es el mismo tratado de Maastricht, el cual, junto con una moneda única, contempla la creación de un Sistema Europeo de Bancos Centrales constituido por un banco central europeo independiente y por los bancos centrales de los países miembros de la CE.

La posición del gobierno -a la que Lamont se ha referido reiteradamente- es que la responsabilidad de la política económica, incluida la determinación de los tipos de interés, debería continuar en manos de las autoridades nacionales durante la segunda fase preparatoria de la UEM, que empieza en 1994. Mientras tanto, a juicio del ministro de Hacienda, el banco debería continuar en su situación actual de dependencia. De lo contrario no habría manera de conseguir que la política monetaria fuera en última instancia responsabilidad del Parlamento.

Ahora bien, es inconcebible que el banco pueda permanecer en la situación presente si el gobierno y el Parlamento deciden en último término la incorporación a la tercera y última fase de la unión, en 1997, cuando una mayoría de los miembros de la CE podrá decidir si se debe seguir adelante con la moneda única y el banco central, o en 1999, en que dos países bastarán para crear la unión. Si Gran Bretaña decide ser miembro de pleno derecho de la UEM, el Banco de Inglaterra deberá ser también independiente.

El calendario establecido en Maastricht significa que el gobierno y el Parlamento británicos deberán debatir antes de terminar el año 1996 si el país debe participar o no en la tercera fase. Esto ocurrirá, probablemente, durante la presente legislatura. Incluso en el caso de que la decisión sea contraria a la participación en dicha tercera fase, 1996 sería una buena ocasión para el debate sobre la constitución y las responsabilidades del Banco de Inglaterra.

Ya ahora se detectan algunas cuestiones espinosas que no pueden esperar a 1997 o 1999. Algunas de ellas son técnicas, como es el caso del papel que ha de representar el banco en los sistemas de ámbito

européico para la liquidación de pagos entre bancos ("settling payments between banks") o la supervisión de estos a lo largo y ancho de la CE. Otras cuestiones son más hipotéticas, pero fundamentales; como los objetivos, la dirección ("governance") y la responsabilidad ("accountability") del Banco de Inglaterra si llega a formar parte de la unión económica y monetaria europea.

Un punto débil de la posición de Lamont sobre este asunto es que, según el ministro, el banco podría pasar fácilmente, "de la noche a la mañana", de su posición no independiente actual a la de independiente. En realidad, el cambio tendría repercusiones importantes.

El papel del banco debería ser definido con claridad si fuera a alcanzar la independencia. ¿Se concentraría en asegurar la estabilidad de los precios, como el Bundesbank?. ¿Conservaría la responsabilidad de la buena marcha de la City y de la industria, o de la supervisión bancaria, como en el presente?. ¿Cual sería el órgano decisorio en el caso de que el banco se encargara de establecer los tipos de interés, bien en el contexto de un sistema de bancos centrales bien como entidad independiente?.

En la actualidad, las decisiones sobre tipos de interés son adoptadas por el ministro de Hacienda después de conversaciones entre el banco y el Tesoro. Pero si el banco llega a ser el responsable de la política monetaria (incluso como parte del sistema europeo de bancos centrales), deberá reestructurar sus órganos de decisión y sus competencias. Su "Bank Court", la cual incluye a empresarios industriales, financieros de la City y sindicalistas, además de funcionarios del banco, no podría, obviamente, tomar decisiones en materia de tipos porque varios de sus miembros incurrirían en posibles conflictos de intereses.

Si tales decisiones tuvieran que ser adoptadas por un nuevo conjunto de gente que incorporara a funcionarios del banco, operando con toda probabilidad bajo el sistema de una persona un voto, los individuos afectados verían grandemente aumentado su poder, lo que plantearía la cuestión de ante quien serían responsables, y cómo.

Por otra parte, ¿a quien representarían?. Gran Bretaña, como Estado unitario, está mal situada para inyectar intereses e influencias regionales en sus burocracias. Al revés que el consejo del Bundesbank alemán o que el Federal Open Market Committee de Estados Unidos, los cuales dan voz a los representantes de las regiones en materias de política monetaria, resultaría difícil reflejar las preocupaciones de Escocia, Gales, los Midlands o el North en el órgano de decisión del Banco de Inglaterra.

Estas son sólo algunas de las cuestiones que deben encontrar respuesta si el Reino Unido decide finalmente incorporarse a la UEM. El problema es que son tan amplias y variadas que no podrían encontrar solución en el último minuto.

Por supuesto, puede ocurrir que Gran Bretaña decida no querer ser miembro de pleno derecho de la unión. Pero incluso en este caso, las implicaciones de la UEM en el Banco de Inglaterra deberían ser consideradas con profundidad y anticipadamente, no fuera a ocurrir que el Banco se viera inmerso en un mundo nuevo sin la preparación necesaria y con un marco estatutario impropio de una institución tan importante para la economía del Reino Unido.

Las difíciles preguntas del Banco Internacional de Pagos.

("Financial Times", edit.)

Como corresponde a una entidad controlada por los gobernadores de los bancos centrales, el Banco Internacional de Pagos no es normalmente un perro guardián. El caso es, sin embargo, que su informe anual de este año ladra ruidosamente. Las dudas de este sobre los planes de la Comunidad Europea para la unión económica y monetaria, por ejemplo, han contrariado a algunos de los gobernadores presentes en la reunión anual del banco. Pero Alexandre Lamfalussy, el director general del BIP, al igual que su equipo de colaboradores, han de ser felicitados por su honestidad. De lo contrario ¿qué sentido tendrían tales informes?.

La EMU no es el único tema criticado por el banco. En una sutil exposición de los problemas financieros actuales el estudio subraya que "las ventajas de la desregulación y de la innovación financieras bien merecen que se luche por ellas. Sin embargo, no son fáciles de alcanzar y es probable que se haya subestimado su coste".

El informe del BIP se refiere a una larga serie de desastres financieros la crisis de la deuda de los países subdesarrollados; el colapso de las entidades de ahorro y préstamo en Estados Unidos; la caída de las bolsas en 1987, y el exceso de crédito, tanto para la adquisición de grandes empresas como para operaciones inmobiliarias.

"Los cambios que han tenido lugar en el marco financiero han facilitado los errores colectivos", concluye el informe. Por ello mismo, "sus consecuencias han sido más graves y más generales, afectando a todo el mundo".

Tales resultados negativos marcan el camino que las autoridades deben seguir mejorar la reglamentación; crear un amplio sistema de pesos y contrapesos; aumentar la calidad de la gestión, en especial en las situaciones de crisis; y reexaminar los límites entre disciplina del mercado, por un lado, e intervención oficial, por otro. Se necesita una mayor disciplina del mercado para hacer frente a las veleidades que resultan de la interferencia excesiva del Estado, pero el paso de una cosa a otra "no es nada fácil".

El BIP es todavía más franco en materia de política comercial. "La mayoría de los países industriales se han desviado en los últimos años de los principios del libre comercio que dicen defender, y esto tiene lugar en una fase en que muchos países en vías de desarrollo han tomado medidas decisivas para abrir sus economías". Este ha sido de verdad uno de los fenómenos más deprimentes de los últimos tiempos. Por supuesto, el BIP tiene toda la razón del mundo, aunque el repetirlo pueda resultar aburrido.

Donde el informe no puede ser aburrido es en la parte consagrada a la UEM, el gran problema del momento. El BIP, desde luego, cree que la CE se ha ganado el palo que recibe. "Después de haber ofrecido el programa a un público sin preparar, los gobiernos se encuentran ahora con un debate y unas disensiones imprevistas".

El equipo que ha elaborado el informe estima que tanto el debate como las disensiones son oportunos. El informe hace observar que los miembros del Sistema Monetario Europeo han dado ya prioridad a sus objetivos respecto al tipo de cambio "aunque esto significara aceptar políticas más contractivas de las que eran consideradas como deseables desde el punto de vista interno". ¿Resolvería la UEM los problemas?. No necesariamente.

El informe arroja algunas dudas sobre la idea de que la unión monetaria conseguiría la estabilidad de los precios, haciendo notar, en cambio, que ese objetivo es "implícitamente vulnerable ante cualquier fallo del consenso político a su favor". El informe alude a la política del tipo de cambio como el talón de Aquiles de la unión monetaria, y advierte que el acuerdo de vincular los criterios de convergencia a un calendario rígido representa "un riesgo de que consideraciones políticas puedan influir en la aplicación de los "standard". El informe también teme que los esfuerzos que se hagan para alcanzar tales "standard" "puedan llevar a unos tipos de cambio y, tal vez, a una política presupuestaria demasiado rígidos, en los próximos años, en algunos países".

Además, no se puede excluir "la posibilidad que en el futuro se produzcan grandes convulsiones con efectos asimétricos. Así, podrían incrementarse las presiones financieras sobre los tipos de cambio a medida que los efectos de las recientes medidas liberalizadoras de los cambios fueran extendiéndose". El BIP se refiere asimismo a los problemas regionales que se derivan de uniones monetarias existentes, así como a la posibilidad de mayores transferencias fiscales de las que parecen probables. Y por si todo esto no fuera bastante, el informe muestra su preocupación por las posibles y prematuras presiones en favor de la igualdad de los salarios.

Este perro guardián ladra ruidosamente. Los gobiernos pueden sentirse tentados a no escuchar. Ahora bien, dado el origen de la crítica, mejor sería que se lo piensaran dos veces.

Un refuerzo contra Maastricht.

(Erik Izraelewicz, en "Le Monde")

Una recomendación para los opositores del tratado de Maastricht y para los otros lean el informe anual del Banco Internacional de Pagos (BIP). En este documento, e independientemente de un cuadro muy completo sobre la situación económica mundial, el banco de los bancos centrales emite series críticas sobre el proyecto de Unión Económica y Monetaria diseñado por los Doce.

Los expertos del BIP denuncian en el informe, en efecto, de forma un tanto desordenada, "los peligros (de la moneda única) inherentes a la consecución del objetivo proclamado (la estabilidad de los precios)", "las incertidumbres que acompañan a los criterios de convergencia" y "los riesgos por lo que se refiere a los resultados económicos generales". El BIP afirma sobre todo que "una unión monetaria entre economías tan divergentes como las de los países miembros es una empresa que conlleva muchas incertidumbres".

Recordando el ejemplo de la unificación alemana, el banco teme que los países menos desarrollados de la Comunidad reivindiquen salarios equivalentes a los de los países más ricos "sin tener en cuenta las diferencias de productividad", lo que "tendría consecuencias indeseables sobre el paro".

Los expertos del BIP subrayan también la magnitud del progreso realizado en Europa, sin contar con una moneda única, en la lucha contra la inflación, y temen que la UEM sea menos eficaz en tal sentido.

Pero, en general, es el paso dado por los Doce lo que el BIP critica. Querer imponer una unión monetaria antes de contar con una verdadera unión política es, a juicio del banco de Basilea, un error en el método. Al igual que otros, el BIP ironiza sobre el hecho de que los gobiernos hayan alcanzado "un acuerdo de principio" que conduce a "una pérdida real de soberanía" para cada uno de ellos, y esto sin debate público y sin haber "hecho prácticamente nada para estimularlo". Se trata de unas circunstancias iniciales poco favorables que hacen temer la adopción de actitudes poco rigurosas ante las obligaciones de la convergencia, dice el banco.

Por otra parte, el BIP se interroga a propósito de la elaboración de las orientaciones monetarias en el marco comunitario. "Cualquiera que sea el margen de maniobra de que disponga en la práctica el banco central europeo para elaborar la política monetaria, el objetivo de la estabilización de los precios puede verse intrínsecamente comprometido si el consenso político que lo rodea sufre la más pequeña duda".

Quien iba a decirlo, ilos grandes banqueros -entre los que figuran los doce gobernadores europeos, padres de la UEM- escépticos ante la moneda única!. Un refuerzo que sin duda no esperaban los señores Chevènement, Pasqua y Marchais.⁽¹⁾

.....

"Los bancos centrales se incorporan al debate sobre el tratado de Maastricht. Así titula Carl Gerwitz su artículo sobre el mismo tema anterior que publica "Herald Tribune" de 16 de Junio y que en síntesis se transcribe a continuación.

Una crítica particularmente dura y poco usual del tratado de Maastricht por parte de una institución internacional provocó un arduo debate el lunes en una reunión de gobernadores de bancos centrales.

El desacuerdo provocado por un informe del Banco Internacional de Pagos llega en un momento en que los planes de la Comunidad Europea para una unión económica y monetaria se ven sometidos a ataques sin precedentes.

Según el BIP, los gobiernos de la CE "han presentado súbitamente un programa a un público en su mayoría falto de preparación". Los gobiernos, así, "se enfrentan con un debate y con unas disensiones de última hora que amenazan las perspectivas de cumplimentación", dice el BIP en un informe elaborado antes de que los daneses votaran "no".

(1) Las tres personalidades francesas citadas, pertenecientes a tres partidos distintos, se han caracterizado por sus actitudes contrarias a la ratificación del tratado de Maastricht. (Nota del trad.)

El BIP es el bastión independiente y conservador del buen orden financiero internacional, pero sus incursiones en el campo de la política son raras, razón por la cual el informe que acaba de publicar ha suscitado no sólo opiniones opuestas sino también indignación. Erik Hoffmeyer, gobernador del banco central danés y presidente del comité de gobernadores de la CE manifestó ante los periodistas que no estaba de acuerdo con los comentarios "sorprendentemente negativos" del informe. "Hay puntos débiles en el tratado, como el hecho de que la política fiscal de los países miembros no esté sujeta a la misma coordinación que la política monetaria, pero esto no significa que el tratado haya de ser renegociado".

El gobernador del Banco de Francia, Jacques de Larosiere, fue más enfático, subrayando que el informe del BIP había sido publicado bajo la responsabilidad exclusiva de su director general, Alexandre Lamfalussy, sin la aprobación del consejo de administración. "Personalmente no lo encuentro en absoluto objetivo sino, por el contrario, muy tendencioso ("biased")", dijo Larosière.

Lamfalussy, por su parte, defendió el informe diciendo que "no se trata de una crítica" del tratado de Maastricht sino que lo que pretende es poner en duda el "consenso político" que ha de hacer posible su cumplimentación.

La principal preocupación del BIP es la tendencia deflacionaria que con toda probabilidad se va a manifestar en el seno de la Comunidad a medida que los países miembros desarrollen sus respectivos programas de convergencia. En el presente, sólo tres de esos países -Francia, Luxemburgo y Dinamarca- reúnen los requisitos exigidos para formar parte de la unión.

El informe del banco expresa también los temores de este de que el esfuerzo que deberán realizar los países miembros para reunir las condiciones exigidas "pueda conducir a unos tipos de cambio y, tal vez, a una política presupuestaria excesivamente rígida en los años inmediatos".

.....

El comentario que Terence Roth dedica a la misma materia en "The Wall Street Journal" dice, resumido, lo que sigue.

El tratado de Maastricht adolece de omisiones que difícilmente podrán ser superadas, según el Banco Internacional de Pagos.

El tratado firmado por los líderes de la CE en Diciembre, en efecto, estableció las líneas maestras de una unión económica y monetaria, pero dejó sin definir cuestiones cruciales relativas al poder político dentro de la Comunidad, a los controles para la vigilancia de la cumplimentación de los compromisos adquiridos y a la prevención de las tensiones sociales que pueden suscitarse entre mercados laborales distintos.

El informe del banco enojará sin duda a muchos políticos europeos y echará leña al debate anti-Maastricht.

En una conferencia de prensa que siguió a la publicación del informe, Alexandre Lamfalussy, director general del banco, señaló que un banco central europeo independiente solo no puede asegurar la estabilidad de los precios si no se cuenta con una base política adecuada. "La verdad es que un banco central europeo no puede operar en medio del vacío político. No es el tratado lo que se necesita sino el consenso global".

A juicio de los expertos del banco, era de prever que el tratado suscitara la resistencia popular que se ha manifestado después de la firma del mismo. "Esto arroja dudas sobre las perspectivas de su cumplimentación".

EL BIP viene así a unirse a la creciente lista de críticos que están poniendo en duda la solidez de los acuerdos de Maastricht y de las eventuales ventajas que pueda este suponer para Europa. Martín Feldstein, profesor de economía en Harvard y antiguo presidente del Consejo de Asesores Económicos de Reagan ha dicho en el número de esta semana de *The Economist* que la unión monetaria es innecesaria e incluso perjudicial para Europa. También señala que la insatisfacción popular con el tratado podría asimismo incrementarse.

Un grupo de conservadores británicos quiere renegociar el tratado, y algunos socialdemócratas alemanes desean establecer nuevas condiciones para la ratificación del mismo. Un grupo de 62 economistas académicos, asimismo alemanes, publicó un comunicado a principios de este mes mostrando su oposición a la unión monetaria, a la que consideran innecesaria.

Mientras tanto, crecen las dudas de que países con grandes déficit y elevadas tasas de inflación tales como Italia, España, Irlanda, Portugal y Grecia puedan llegar a reunir las condiciones necesarias para participar en la unión. Incluso Bélgica, el país donde la CE tiene su sede, tendría que reducir drásticamente el nivel de su deuda.

Por lo demás, "la decisión de vincular los criterios de convergencia a un calendario rígido sugiere que existe el riesgo de que puedan entrar en juego consideraciones políticas a la hora de aplicar tales criterios". Si esto fuera así, todo el sistema podría verse gravemente afectado, dice el BIP...

Las relaciones Norte-Sur después de Río y en vísperas de la cumbre de los 7G.

(Peter Norman en "Financial Times" de 15 de Junio)

¿Van a mejorar las relaciones entre los países industrializados y los subdesarrollados?. La pregunta parece intempestiva después de la cumbre de Río en la que el enfrentamiento entre el Norte y el Sur ha adquirido a veces tintes dramáticos.

Con todo, hay síntomas que parecen sugerir que la inminente reunión de jefes de Estado y de gobierno de los Siete Grandes que se ha de celebrar en Munich podría señalar una nueva etapa de las relaciones

Norte-Sur, en un momento en que ambos grupos se esfuerzan por encontrar su sitio en el mundo postcomunista.

El canciller alemán, Helmut Kohl, piensa incluir sólo cinco puntos en el orden del día oficial de la reunión que va a tener con los líderes de Estados Unidos, Japón, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá y la Comunidad Europea. Las relaciones con el mundo en vías de desarrollo aparecen en el segundo lugar de la lista, inmediatamente después de la tradicional ronda de intervenciones sobre la situación de la economía y sobre el crecimiento. Los contactos con el Tercer Mundo, por consiguiente, han sido colocadas delante de puntos tales como las relaciones con la antigua Unión Soviética y la Europa central y oriental y como el análisis de propuestas destinadas a aumentar la seguridad de las centrales nucleares del bloque del este.

Otra señal de que los grandes países industriales desean involucrar más estrechamente a los países subdesarrollados en el proceso de desarrollo del planeta la ha proporcionado el Secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas Brady, el cual recibirá a los ministros de Hacienda de once países iberoamericanos la próxima semana para conocer -antes de la reunión de Munich- los puntos de vista de estos en materia de comercio, de deuda y de inversión en la zona. Este será el primer encuentro "hemisférico" ante una reunión de los Siete Grandes.

También los países del Tercer Mundo han emprendido iniciativas para contactar con los países ricos. Abdou Diouf, el presidente de Senegal, escribió recientemente al gobierno alemán en nombre de 15 países en vías de desarrollo pidiendo poder estar presentes en la reunión de Munich. Tal solicitud fue rechazada, pero Horst Kohler, el alto funcionario alemán encargado de preparar la cumbre de Munich, se reunió con el ministro senegalés de Asuntos Exteriores, a quien se ha prometido que lo señalado por el grupo de 15 países será incluido en la documentación de la reunión.

Estos contactos recuerdan las primeras aproximaciones entre los 7G y la Unión Soviética a finales de los años 80. Mikhail Gorbachev produjo un pequeño terremoto en Julio de 1989 cuando escribió a la cumbre de los Siete Grandes de París proponiendo una mayor cooperación entre estos y la entonces Unión Soviética. Cuando llegó la cumbre de Houston, en 1990, la propuesta de Gorbachev se había convertido en un llamamiento para que los 7G ayudaran a su imperio en apuros. Y sólo un año más tarde, en la reunión de Londres de los jefes de Estado y de gobierno de los mismos países, Gorbachev hizo una de sus últimas y más notables apariciones sentándose con aquellos en una sesión especial al término de la reunión formal. Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, se unirá en Munich a los 7G después de que estos hayan dado fin a la cumbre propiamente dicha.

Funcionarios occidentales subrayan que no hay planes para convertir los contactos con el grupo de los 15 anteriores y posteriores a la reunión de Munich en un diálogo formal Norte-Sur. Además, es poco probable que los contactos vayan a ser tan estrechos como los que se establecieron, primero, con la Unión Soviética y, después, con Rusia. Pero la positiva reacción alemana ante la gestión senegalesa señala un cambio de estilo en relación con la situación anterior. En el pasado, en efecto, Estados Unidos, Japón y Alemania, sobre todo, se resistieron a aceptar cualquier iniciativa que pudiera involucrar seriamente a los 7G en el debate Norte-Sur.

Una importante razón que explica este cambio es la nueva voluntad de países en vías de desarrollo como los del citado grupo de 15 de adoptar los conceptos occidentales de economía de mercado, de buen gobierno y de democracia. No se han desvelado los detalles de la carta de aquellos al gobierno de Bonn, pero funcionarios de los países industriales afirman que la carta les ha impresionado por los puntos de vista tan "realistas" expresados por el grupo dirigido por Senegal y por la convergencia en la forma de pensar de los dos grupos, el 7G y el G15.

El canciller Kohl entiende que los problemas con que se enfrentan los países industriales sólo pueden ser resueltos conjuntamente con los de los países en vías de desarrollo. Su objetivo en la cumbre de Munich, por consiguiente, será asegurar que sus colegas compartan este punto de vista.

En áreas no económicas, desde luego, hay importantes cuestiones que necesitan claramente soluciones compartidas. El medio ambiente es una de ellas, y ha sido puesta de manifiesto en Río. Otros problemas que encontrarán mejor respuesta si son abordados a través de la cooperación son, entre otros, la inmigración, el control de las epidemias y el comercio internacional de drogas.

En el ámbito económico, los países industriales están aprendiendo hasta qué punto pueden beneficiarse de unos mayores contactos con el Tercer Mundo. La conciencia de esta realidad llevó a la creación, hace un par de años, por parte del presidente Bush, de Enterprise for the American Initiative (EAI), y explica la decisión de Nicholas Brady de invitar a los ministros de Hacienda iberoamericanos para que visiten Washington la próxima semana.

Las ventajas de unas relaciones Norte-Sur más estrechas en el contexto americano fueron analizadas recientemente por David Mulford, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para asuntos internacionales, en una conferencia pronunciada en la Heritage Foundation, un centro de estudios con sede en Washington consagrado a la promoción de la economía de mercado. Los Estados Unidos -dijo Mulford- "necesitan cada día más la prosperidad económica y el bienestar político de Iberoamérica", a medida que el mundo va siendo más competitivo. Por cada mil millones de dólares de exportaciones a Centro y Sudamérica se crean 20.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, añadió Mulford.

De todos modos, el sentimiento proteccionista de los países industriales constituye una barrera importante que se opone a unas más positivas relaciones entre el Norte y el Sur. En tanto en cuanto la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales permanezca detenida, los Siete Grandes y los otros países industrializados se encontrarán en una mala posición para promover la economía de mercado y el pluralismo político en los países en vías de desarrollo.

Señor, libranos de los déficit.

El artículo que sigue, de Michael Prowse, apareció publicado en "Financial Times" de 26 de Mayo.

Promete ser uno de los capítulos más sorprendentes de la historia fiscal. El mes que viene, un Congreso de mayoría democrática va a apoyar, casi con toda seguridad, una enmienda constitucional por la que se va a exigir el equilibrio del presupuesto federal. La Casa Blanca ha anunciado ya su apoyo a tal enmienda. La necesaria ratificación por las tres cuartas partes de las legislaturas de los estados no parece que vaya a constituir tampoco un problema. La mayoría de estos estará deseando imponer a Washington una limitación que ellos han estado soportando desde hace tiempo, Crease o no, son muchos los expertos que vaticinan que

la exigencia de un presupuesto federal equilibrado será parte integrante de la ley fundamental de Estados Unidos antes de cinco años.

Esta perspectiva está dando lugar a un torrente de comentarios críticos. El Congressional Budget Office, integrado por representantes de los dos partidos, ha denunciado estos planes como una "broma cruel". El Washington Post afirma que "son burdos, peligrosos... la máxima expresión de la debilidad y de la confusión que los mismos planes pretenden corregir". La alarma ha alcanzado a influyentes órganos conservadores. The Economist se muestra contrario a la enmienda y dice que se trata simplemente de una estratagema destinada a distraer la atención ante el fracaso de no haber conseguido reducir el déficit récord actual.

Por mi parte me siento más bien del lado de los congresistas. Puede ser más fácil votar a favor de un déficit equilibrado en 1997 que proceder a una reducción de este o a un aumento de los impuestos hoy. Sea como fuere, la simple amplitud del asentimiento a favor de la enmienda indica un notable cambio de opinión. Una reforma que durante mucho tiempo sólo fue defendida por un puñado de conservadores a ultranza es hoy propugnada por el senador Paul Simon, un conocido demócrata progresista, así como por muchos otros situados en el centro izquierda. ¿Qué es lo que pasa?.

La respuesta es que años de crítica de los déficit han producido sus efectos. La batalla intelectual está ganada. Son ahora mayoría los miembros del Congreso convencidos de que los déficit persistentes causan daño. El impacto a largo plazo sobre el ahorro nacional y, por consiguiente, sobre la inversión, la productividad y el crecimiento es mejor comprendido hoy que en los años 80. Al mismo tiempo, los grandes déficit son denunciados en todas partes como una carga inmoral sobre las generaciones futuras y, cada día más, como una fuente de desigualdad hoy. El gobierno federal paga más por intereses percibidos por los ricos poseedores de bonos de lo que gasta en los programas para los menos favorecidos. Pero los políticos también saben -mejor aún que sus críticos- que el carácter peculiar de la política norteamericana hace difícil llevar a cabo una acción responsable, especialmente cuando los dos grandes partidos comparten el control del Congreso y de la Casa Blanca.

Muchos de los argumentos contra la enmienda constitucional son falsos. La gente dice, por ejemplo, que los estados de la Unión burlan las exigencias relativas al equilibrio de sus presupuestos; y la verdad es que pueden hacer algunas trampas, pero su comportamiento es ejemplar si se compara con lo que se hace en el marco federal. La mayoría de ellos adoptan medidas severas, cuando ello es necesario. Este no ha sido el caso en Washington desde hace muchos años. El gobierno federal sólo ha conseguido un superávit desde la presidencia de Dwight Eisenhower. En los últimos 12 años, la deuda nacional pasó de 1 a 4 billones de dólares.

Una objeción más seria es que el gobierno federal necesita flexibilidad fiscal porque su labor consiste más en equilibrar la economía que sus propias cuentas. Los economistas ofrecen dos respuestas. La escuela neoclásica sostiene que el ajuste ("fine-tuning") fiscal es imposible porque los movimientos del ahorro privado alteran los efectos de las actuaciones gubernamentales. La experiencia de los 80, en que tanto el ahorro público como el privado bajaron substancialmente, ha refutado en buena parte esta manifestación de buenos deseos. En cambio, si tiene solidez una segunda objeción a la gestión de la demanda fiscal ("fiscal demand management") cuando los políticos han conseguido ponerse de acuerdo sobre cómo responder a una recesión y han aprobado la legislación adecuada, la economía ha entrado ya en una nueva fase expansiva, La importancia práctica de una reducida flexibilidad fiscal puede que sea, pues, limitada.

Dependerá, en cualquier caso, del gradualismo de la enmienda sobre un presupuesto equilibrado. No tiene sentido, en principio, pretender alcanzar el equilibrio en un año, pero si el plazo fuera de tres, cuatro o cinco años la cosa sería perfectamente factible. Esto permitiría que los "estabilizadores automáticos" -menores impuestos y transferencias asistenciales en alza- protegieran la demanda durante las recesiones. Según las

propuestas actuales, una mayoría de tres quintos en las dos cámaras podría anular la norma del equilibrio presupuestario. Tales mayorías serían fáciles de conseguir en los casos de crisis como la de los años 30. En cualquier caso, la pretendida libertad permitida por las leyes actuales ha sido una ilusión el gobierno federal se endeudó tanto en los años 80 que no pudo hacer nada por mitigar la recesión.

El drenaje de ahorro resultante de los persistentes déficit constituye una amenaza mucho mayor que cualquier pérdida temporal de flexibilidad fiscal. Sin embargo, la fragmentación de la responsabilidad política que resulta del sistema norteamericano concentra la atención en el corto plazo. Esto proporciona argumentos para una enmienda constitucional, es decir, a favor de normas que obliguen a Washington a contemplar las cosas con mayor perspectiva. Después del fracaso de las leyes Gramm-Rudman en los años 80, la gran pregunta es si la enmienda funcionaría.

No seamos excesivamente cínicos. La aprobación de una enmienda constitucional no es lo mismo que la aprobación de una ley ordinaria. Como mínimo demostraría la existencia de un amplio consenso nacional a favor de las limitaciones fiscales. Una actitud de esta naturaleza supondría una mayor presión sobre el Congreso y sobre la Casa Blanca para que adoptaran decisiones graves a los próximos años. Todo esto podría alterar radicalmente el curso de la política fiscal. Acudir a la autoridad de la ley suprema constituye el equivalente moderno de las plegarias de la tribu pidiendo un juicio acertado. Las preces son a veces escuchadas.

Suiza abandona su posición tradicional.

("Financial Times", edit.)

Tras muchos años de duda, los suizos han llegado al momento de las decisiones. El referéndum de la semana pasada, en el que decidieron su incorporación al FMI y al Banco Mundial, confirma los síntomas anteriores que hacían pensar en un abandono de la neutralidad dogmática. Por otra-parte, la decisión del gobierno de solicitar la entrada en la CE, unida al anuncio de dos referéndum, este mismo año, sobre la eventual incorporación al Area Económica Europea, dejan planteada con toda claridad la cuestión de la situación de Suiza en el contexto europeo.

Desde el punto de vista de la CE, la incorporación de Suiza en todas estas instituciones debe ser bien recibida. Los exportadores de bienes y servicios a Suiza se beneficiarán de la eliminación de los obstáculos que todavía protegen el 70 por ciento del comercio interno del país frente a las fuerzas del mercado. Políticamente, Gran Bretaña, en particular, encontraría en Suiza a un aliado valioso, preocupado también por las tendencias burocráticas y centralizadoras de la CE. Y la Comunidad, en su conjunto, se beneficiaría de la competencia administrativa y diplomática suiza.

Desde el punto de vista suizo, unos lazos más estrechos con la CE mejorarían las perspectivas económicas del país en un momento en que las circunstancias especiales que le llevaron al éxito industrial y financiero de la posguerra han desaparecido.

Contrariamente a lo que a veces se ha podido pensar, los suizos nunca han sido aislacionistas. Pero corren el riesgo de quedar aislados en el futuro si no se aproximan a la CE. Los jóvenes sufren las consecuencias de no poder trabajar y estudiar libremente en otros países europeos. Incorporándose a la AEE los suizos se asegurarían un sitio en el interior del mayor bloque comercial del mundo.

Los costes son elevados, sobre todo el compromiso de invertir la suma colosal de 30 m.m. de francos suizos, aproximadamente, a lo largo de los próximos 20 años, en la construcción de dos nuevos túneles ferroviarios a través de los Alpes. Sea como fuere, los suizos tienen mucho más que ganar que perder como resultado de su incorporación al Área Económica Europea.

La cuestión de la entrada en la CE es más compleja. La Confederación Helvética es una alianza relativamente débil de cuatro grupos lingüísticos, los cuales no tienen mucho más en común que una moneda, un sistema ferroviario y un servicio postal. Se ha mantenido unida por una estructura de gobierno ligera y descentralizada, así como por la tradición de dejar las grandes decisiones en manos del pueblo. Si el país se incorporara a la CE, las alianzas regionales y lingüísticas podrían llegar a ser más fuertes que los lazos internos, con lo que la frágil estructura que mantiene la confederación unida podría debilitarse aún más.

Tal vez esto no sería importante si los suizos consiguieran difundir el secreto de su característica cohesión a toda Europa, de la cual constituyen el centro geográfico y son ya un microcosmos lingüístico.

Las previsiones económicas pueden perjudicar su salud.

(Martín Wolf, en "Financial Times")

Si los pronosticadores no pueden prever el futuro, ¿deberían seguir existiendo?. Esta es la pregunta que deben estar haciéndose ministros y hombres de negocios.

Por supuesto, los pronosticadores lo han hecho bastante bien cuando las economías han seguido un curso normal, acomodándose a las tendencias a largo plazo. Pero también lo haría una simple extrapolación. Las previsiones han fallado siempre que se han producido alteraciones, que es justamente cuando más necesarios serían los pronósticos acertados.

Piénsese en lo que ha ocurrido recientemente con ese decano de las instituciones consagradas a la previsión económica que es la OCDE. No más allá de Junio de 1990, la Organización pronosticó un crecimiento de la economía norteamericana del 2'3 por ciento para 1991 respecto a 1990. Esta predicción fue

sucesivamente reducida en todas las estimaciones que siguieron. Más recientemente, las previsiones se referían a una cifra negativa de -0'7 por ciento.

Para Europa, el error de 1991 fue parecido al de Estados Unidos, conceptualmente, aunque de inferior magnitud. Y por lo que a Japón se refiere, su economía funcionó mejor que las de Estados Unidos y Europa, en 1991, aunque ahora las cosas andan peor. En la previsión de Diciembre de 1990 se hablaba de un crecimiento del 3'8 por ciento para 1991/92, cifra que fue posteriormente reducida al 1'8 por ciento, esperándose que baje todavía más.

La gente que hizo sus cálculos económicos con base en las predicciones de la OCDE es probable que esté ya arruinada. Esto no significa, en absoluto, que estaría hoy en mejor situación si hubiera confiado en otros pronósticos convencionales. Al igual que las ovejas los pronosticadores han estado más próximos los unos a los otros que a la verdad.

Las estimaciones publicadas por el Fondo Monetario Internacional en su "World Economic Outlook" han dicho prácticamente lo mismo que las de la OCDE. El Tesoro británico no supo prever la expansión económica del Reino Unido en los años 1986-88, ni la recesión que se inició a finales de 1990, ni la persistencia de esta. Muchos de los que operan en la City londinense han seguido los pasos del Tesoro.

La Guerra del Golfo es una de las razones que explican por qué muchos de los pronósticos para 1991 resultaron torcidos. Pero esta es sólo una parte de la historia. El caso es que después de 50 años de ejercicio y de un enorme incremento del poder informático se puede dudar de la capacidad de los economistas para proporcionar estimaciones precisas, incluso a corto plazo.

Una razón de los repetidos errores son los cambios que se van introduciendo en el marco de la política económica. La liberalización de los mercados de capitales, por ejemplo, hace que los comportamientos del pasado apenas signifiquen nada respecto a lo que puedan representar para el futuro. El tiempo puede arreglar este problema, pero no si tales cambios van a convertirse en una característica permanente de la vida económica.

Pero todavía hay una preocupación de más peso. La previsión presupone que se repetirán las respuestas de la gente a situaciones pasadas. Supóngase, sin embargo, que las expectativas de los individuos sobre el futuro están determinadas, no por la información económica anterior, sino por una visión mucho más compleja de cómo el mundo funciona. Los comportamientos, en tal caso, no se repetirían, puesto que no lo hace la historia.

Como respuesta a fallos de previsiones anteriores, algunos economistas abandonan ahora la economía, utilizando en su lugar el llamado Eayesian Vector-Autoregressive Model. El profesor Michael Artis, de la Universidad de Manchester, ha seguido a varios economistas norteamericanos en esa dirección. El nombre es atractivo, pero la realidad lo es menos. Según este método, el ordenador sólo busca relaciones estadísticas en la información.

Pero incluso en el supuesto de que tales métodos funcionaran, su valor para los encargados de dirigir la política económica sería nulo. Lo que estos desean saber, por ejemplo, es qué ocurriría si se redujeran los tipos de interés. Los economistas no pueden abandonar del todo la economía.

¿Cuáles son las lecciones de todo ello?. Primero, los pronosticadores deberían reconocer las imprecisiones de lo que hacen introduciendo intervalos explícitos en todas sus estimaciones. Segundo, deberían descansar en el raciocinio ("judgement") más de lo que lo hacen ya.

Cualquiera que recordara la teoría de la deflación de la deuda de Irving Fisher ("debt-deflation theory") sobre la Gran Depresión comprendería mejor las fuerzas que últimamente han propulsado a las grandes economías que aquellos que utilizan los modelos ortodoxos. Al igual que en el ajedrez en sus niveles superiores, la intuición humana y la experiencia pueden aún superar el poder de un ordenador. Es probable que así siga siendo durante mucho tiempo.